

La ofensiva militar de noviembre y su impacto económico social

Aquiles Montoya
Julia Evelyn Martínez

Resumen

No existe una relación causal mecánica del tipo miseria-insurgencia. Sin embargo, si a la miseria existente, le añadimos la organización y la concientización y una estructura político-militar capaz de orientar un determinado proceso, la resultante es la guerra que actualmente vivimos y sufrimos. Hasta ahora los planes económicos para superar la crisis han fracasado porque no se han atendido sus causas estructurales, respondiendo, en lugar de ello, con planes contrainsurgentes y porque se ha querido separar inútilmente la relación guerra y crisis económica. Los efectos económicos de la ofensiva de noviembre confirman estas afirmaciones generales, hundiendo más a las mayorías populares en la miseria.

Después de casi una década de guerra, al menos debería de estar claro, el origen estructural de la misma. Mucho se ha escrito al respecto, con mayor o menor profundidad se han señalado los factores económicos, sociales, políticos e ideológicos que están a la base de la misma. Todos a una son generantes, aunque en distinto grado, del actual conflicto social, lo cual ha permitido distintas interpretaciones del mismo, poniendo el acento en uno u otro factor; llegándose, incluso, a sostener tesis totalmente falsas como aquella que busca encontrar las raíces de la guerra en el conflicto este-oeste. En este sentido, la guerra no

tendría ningún origen interno y sería tan sólo un fenómeno puramente ideológico importado. Otros, en cambio, han puesto el énfasis en lo político y les ha parecido que basta con que existan elecciones no fraudulentas para que el conflicto pierda su razón de ser y existir. Lo político, obviamente, es un factor muy importante, pero elecciones no fraudulentas no es lo mismo que elecciones libres; para que unas elecciones sean realmente libres deben de participar en la contienda electoral, con libertad y seguridad, las distintas corrientes político-ideológicas, lo cual, hasta ahora, no ha ocurrido en nuestro país.

El Estado se negó a reconocer el origen del conflicto mismo y más que ir a sus raíces estructurales se dedicó a implementar, tan sólo, medidas contrainsurgentes.

Además están los factores económico-sociales, los cuales tienen un mayor poder explicativo del conflicto, en tanto que impulsan hacia una determinada acción política que posibilita incidir o transformar las condiciones económico-sociales. En consecuencia, mientras no se avance en una dirección que apunte a resolver los graves problemas económico-sociales, éstos continuarán generando conflictividad social y, en nuestro caso, donde la conflictividad social ha adquirido su máxima expresión, pues, continuarán generando guerra.

Nos parece que en una explicación de este tipo es posible encontrar mayor racionalidad, muestra de lo cual es la realidad misma de la guerra que se ha expandido hasta la capital.

1. La guerra

Antes del 11 de noviembre se pensaba que la actividad del FMLN iba en franca decadencia, incluso, se llegó a sostener que estaba a tal punto desgastado que se había reducido a unos cuantos grupos aislados y que por tal razón buscaba una salida política. Sin embargo, la actividad del 11 de noviembre y de los días subsiguientes ha demostrado que la realidad es muy distinta. Entonces surge la pregunta ¿cómo y por qué el FMLN lejos de debilitarse se fortalece? ¿Por qué pese a las constantes bajas que sufre no aparece como una fuerza diezmada y de baja moral combativa? La razón sólo puede encontrarse en el hecho de nuevas incorporaciones, tanto a nivel político como militar, en el surgimiento de nuevos colaboradores en materia logística, etc.

Ahora bien, ¿por qué se incorpora esta población? Seguramente porque las condiciones económicas, sociales y políticas les son tan adversas que se ven impulsadas a buscar en el movimiento popular una alternativa de solución a sus injustos problemas. Ciertamente, el fenómeno antes descrito no es tan simple ni mecánico; no obstante, nos parece que tiene mucha capacidad explicativa y en todo caso, aún sin reconocer ninguna relación

causal, al menos no se puede negar que existe correlación.

Veamos algunos indicadores de las condiciones económicas, sociales y políticas de los últimos años. Durante la década de 1970, cuando nacieron las organizaciones revolucionarias, el PTB creció de manera sostenida, pasando de 2,393.6 millones de colones en 1970 a 3,601.6 millones de colones en 1979; la producción de café aumentó de 2.9 millones de quintales en 1970 a 4.1 millones de quintales en 1979; la balanza comercial, aunque en algunos años dio saldos negativos, era favorable; los términos de intercambio, en promedio, fueron favorables durante el mismo período; la inflación no era todavía un problema grave.¹ En general, la economía estaba bastante bien. Sin embargo, en 1977, el 31.8 por ciento de las familias estaban por debajo de la línea de pobreza absoluta; para 1970 se reconocía que el 10.2 por ciento de la PEA estaba en condición de desempleo abierto y el 44.6 por ciento estaba subempleado; el 50 por ciento de las familias participaba de apenas el 18.6 por ciento del ingreso, mientras que el 20 por ciento se apropiaba del 50.8 por ciento. Nos parece que bastan estos datos para colegir que las condiciones de salud, de educación, de vivienda, de nutrición no podían ser satisfactorios para la mayoría de la población.

Además, es preciso señalar que aún durante esta década se buscaron opciones estrictamente políticas; sin embargo, los fraudes electorales de larga data en la historia política salvadoreña persistieron; fue un hecho reconocido que, en 1972 y en 1977, la oposición ganó las elecciones, no obstante se impuso el candidato del partido oficial.

Las condiciones sociales desastrosas para grandes mayorías de salvadoreños, la frustración política más la toma de conciencia de que la vida política estaba vedada para hacer las transformaciones estructurales necesarias, posibilitaron el surgimiento de nuevas modalidades de organización popular y una actividad política hasta en-

tonces inédita. La respuesta fue la represión, la cárcel, la tortura, los asesinatos. Debía de ser obvio que la violencia sólo podía engendrar más violencia, sobre todo cuando ésta provenía de un Estado que se negó a reconocer el origen del conflicto mismo y más que ir a sus raíces estructurales se dedicó a implementar, tan sólo, medidas contrainsurgentes. Es así como caímos en la vorágine de la guerra con su secuela de muerte y destrucción.

Debido a múltiples causas, durante la década de 1980, la economía experimenta un deterioro terrible y las condiciones sociales de vida de un mayor número de familias salvadoreñas empeoraron día a día. El PTB cayó de 3,601 millones de colones en 1979 a 3,144 en 1988; la balanza comercial se volvió crónicamente deficitaria; los términos de intercambio se tornaron desfavorables; la inversión interna bruta cayó al 50 por ciento del nivel de 1978; el presupuesto del Estado se volvió deficitario y se comprimieron los rubros sociales.

La inflación se convirtió en un serio problema y así tenemos que, entre 1978 y 1988, el costo de la vida aumentó casi cinco veces. El IPC base de 1978 fue de 498.9, el desempleo abierto se mantuvo alrededor del 10 por ciento, mientras que el subempleo alcanzó al 50 por ciento de la PEA. Las familias por debajo de la línea de pobreza absoluta alcanzaron el 64 por ciento, mientras que las que estaban por debajo de la línea de pobreza relativa representaban el 85.5 por ciento del total de familias a nivel nacional. Ello es una consecuencia obvia de la depresión económica, de la inflación y de la política económica del Estado que buscó descargar sobre las masas asalariadas sus medidas estabilizadoras, manteniendo los sueldos y salarios congelados. Si ésta era la situación de miseria en 1988, es lógico suponer que en 1989, cuando se inició la liberalización de los precios con la nueva política económica del nuevo régimen, la situación en vez de mejorar habría empeorado.

Ciertamente, no creemos que exista una relación causal mecánica del tipo miseria-insurgencia, como ya lo señalábamos con anterioridad. Sin embargo, si a esa miseria, le añadimos la organización y la concientización y una estructura

político-militar capaz de orientar un determinado proceso, la resultante si nos parece que es la guerra que actualmente vivimos y sufrimos.

Reparemos tan sólo en los siguientes hechos: cuando el régimen demócrata cristiano lanzó su "paquetazo" en 1986, que claramente iba a afectar a las mayorías trabajadoras, surgió la UNTS, para responder organizadamente a dichas medidas. La lucha reivindicativa posibilitó una mayor concientización de los trabajadores. Posteriormente, la UNTS ha sido considerada por el Estado como una organización de fachada del FMLN, no porque lo fuera efectivamente, sino porque se veía el peligro su radicalización. Otro hecho, las cooperativas del sector reformado en tanto que presentan una organización que vela por sus derechos y que impulsa acciones reivindicativas y de solidaridad con otras organizaciones de trabajadores, se busca por distintos medios lícitos e ilícitos su eliminación.

No porque sean fachadas del FMLN, sino porque los ideólogos del régimen, temen su potencialidad política.

Finalmente, iniciamos la década de 1990 bajo estado de sitio, porque, tal como lo dijo un alto jefe militar, con las nuevas medidas económicas del gobierno habrán respuestas organizadas de los trabajadores. Por eso, es mejor mantener el estado de sitio porque así los trabajadores no tienen derecho a manifestarse en contra.

Pues bien, si queremos entender, aunque sea parcialmente, la ofensiva de noviembre de 1989 y si, además, no deseamos que continúe la guerra, reparemos en esta simple "ecuación política": miseria + organización + concientización + estructura política y militar = guerra. La ofensiva de noviembre fue posible porque los términos de la ecuación estaban presentes y si no derivó a más, seguramente, fue por el diferente nivel alcanzado por los distintos elementos, cuantitativa y cualitativamente, pero ello no impide que sigan ocurriendo ofensivas con todo su impacto negativo en la vida nacional.

Esa misma ecuación es la que conduce a distintas visiones sobre cómo finalizar el conflicto. Para algunos, todo el esfuerzo debería de en-

caminarsen a derrotar militarmente al FMLN, con lo cual desaparecería la estructura político-militar y les parece que, obviamente, la guerra. La pregunta que surge es ¿por cuánto tiempo? Otros, en cambio, buscan impedir la organización y así se impediría la concientización y la estructura político-militar terminaría debilitándose hasta que ya no significara ningún peligro real. El problema de este enfoque radica en que se puede impedir la organización pública, pero no la secreta o clandestina, la cual tiene la cualidad de radicalizar más rápidamente al organizado. Nosotros pensamos que mientras exista miseria o no se avance en la ruta hacia su significativa disminución, los otros elementos seguirán estando presentes. En este sentido, si la guerra misma genera miseria, lo primero es parar la guerra. De esta forma, se evitaría continuar con la destrucción de la economía y se posibilitaría, a su vez, una reasignación de los recursos del Estado, en la actualidad sesgados hacia las actividades propias de la guerra.

A fin de ser más convincentes en esta línea de pensamiento procederemos a estimar el impacto económico y social de la última ofensiva del FMLN.

2. El impacto económico de la guerra

2.1. La relación entre la guerra y la crisis económica

A lo largo de los nueve años de guerra civil, los costos materiales y humanos generados por el conflicto han desgastado profundamente a la sociedad salvadoreña, agudizando aún más la crisis socio-económica que venía gestándose desde la década de 1970.

Los datos oficiales disponibles (Ver Cuadro 1) indican que en el período comprendido entre 1979 hasta 1987, los daños a la economía causados por la guerra ascienden, en términos reales, a más de 1,200 millones de colones, de los cuales la mayor parte está concentrada en los sectores de energía y transporte. Asimismo, las pérdidas en recursos humanos durante estos años han sido cuantiosas. La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador estima en casi 70,000 las muertes

acaecidas por la violencia desde 1979.

Cuadro 1
Total de los costos directos e indirectos generados por la guerra en el período 1979-1987. En términos reales.
(Millones de colones constantes de 1978)

Sector	Costos directos	Costos indirectos	Total
I. Energía	47.52	266.40	313.92
II. Telecomunicac.	14.45	76.97	91.42
III. Transporte	78.14	331.16	409.29
IV. Construcción	49.57	321.40	370.98
V. Acueductos y Alcantarillados	5.67	28.99	34.67
VI. Municipalidades	0.63	n.d.	0.63
VII. Educación	3.27	n.d.	3.27
VIII. Producción agrícola	12.23	n.d.	12.23
Total	208.21	1,024.93	1,233.14

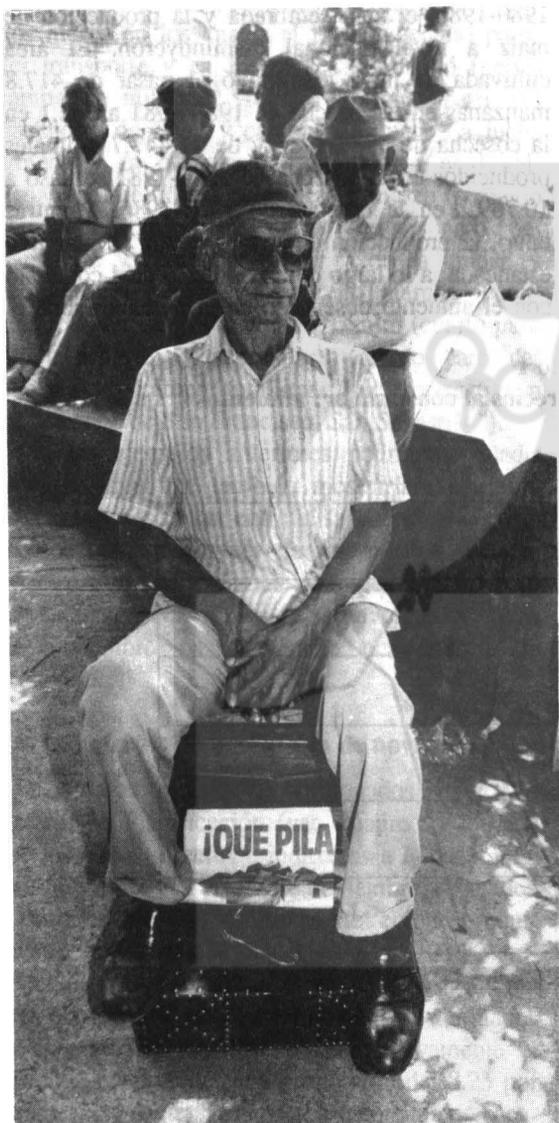
Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES, sobre la base de información oficial del Ministerio de Planificación. *Boletín Económico y Social*, diciembre de 1989.

Paralelamente al deterioro causado por la guerra, en estos años, la economía salvadoreña ha sufrido las consecuencias de la crisis estructural del modelo primario exportador industrializante, cuyas principales manifestaciones son la disminución en la tasa de crecimiento real, la inflación, el deterioro del sector externo y el desempleo y el subempleo.

De cara a esta situación, desde 1980, la política económica ha pretendido bajo distintas modalidades conciliar la realidad de la guerra con la necesidad de superar la crisis económica y social. Sin embargo, tales intentos han sido infructuosos, debido, principalmente, al empeño de la política económica de ver la guerra como un fenómeno independiente o exógeno a la crisis económica y que, por lo tanto, la única condición necesaria para que deje de constituir un obstáculo para la estabilización y la reactivación económica es tener fuentes de financiamiento que no generen inflación.

Esta visión sobre la relación guerra-crisis es la reponsable del fracaso de las medidas económicas encaminadas a lograr que la economía crezca a pesar de la guerra, y que en aquellos casos en que este objetivo se ha logrado lo haya hecho de manera "artificial," es decir, a costa de un aumento en los créditos y de las donaciones norteamericanas y de la expansión desmedida de los sectores improductivos, como el comercio suntuario y el área de servicios.

Aquí, nosotros partimos de que la relación guerra-crisis es una relación sumamente compleja,



en la cual ambos elementos se retroalimentan constantemente. Por una parte, la guerra y su profundización es resultado y expresión de la crisis económica y social, pero al mismo tiempo es un factor que la reproduce de manera ampliada. Para efectos de este trabajo nos interesa destacar cómo se efectúa esta última relación a fin de poder apreciar en toda su magnitud la incidencia de la ofensiva militar de noviembre.

El impacto de la guerra sobre las variables económicas es diverso y en muchos casos difícil de medir. Sin embargo, se revela con mayor claridad en su relación con el déficit fiscal, la inversión, la producción, el empleo, la inflación, y la satisfacción de las necesidades básicas. Veamos a continuación dos ejemplos de cómo la guerra afectó algunas de estas variables antes de noviembre de 1989.

En primer lugar, la necesidad de obtener recursos financieros para las crecientes necesidades de la guerra ha originado un cambio en la orientación de los gastos y fuentes de financiamiento del gobierno. La participación de los gastos de defensa y seguridad dentro del presupuesto general aumentó en el período 1977-1988, pasando del 7.5 al 25.97 por ciento; mientras que los gastos relacionados con salud y educación decrecieron, pasando del 32.6 a sólo el 22.8 por ciento. Este cambio se hace más evidente al reparar en la estructura de los gastos de funcionamiento del gobierno, conformados principalmente por sueldos y salarios. Dentro de ellos, en 1987, a Defensa y Seguridad Pública correspondió el 47.3 por ciento del total, lo cual coloca al resto de unidades primarias en una situación en la cual cualquier recorte adicional en el presupuesto pone en peligro el funcionamiento mismo del aparato burocrático.²

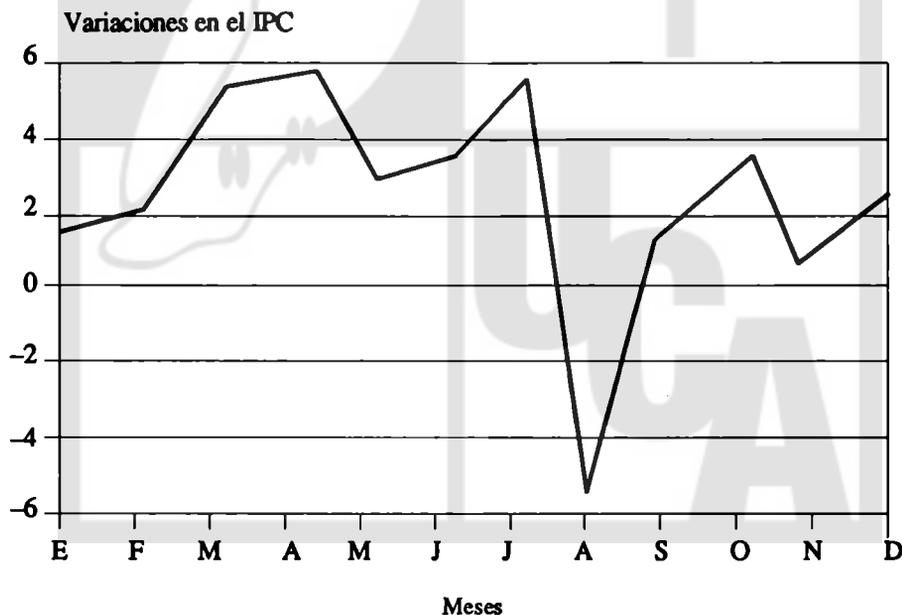
Esta situación ha vuelto inconveniente proseguir con la política de recortar los presupuestos del resto de las unidades primarias para trasladarlos al financiamiento de los gastos de guerra y, por tanto, para cubrir las necesidades se ha tenido que recurrir a la ayuda externa, especialmente bajo la forma de donaciones. Durante el período 1981-1988, El Salvador recibió donaciones de la AID por un monto de 3,312.6 mi-

lones de dólares, de los cuales el 72.6 por ciento en promedio correspondió a ayuda vinculada directa o indirectamente con la guerra. El impacto que la prioridad de la guerra tiene dentro del presupuesto puede medirse a través de tres efectos: (1) la disminución de los gastos de tipo social destinados a favorecer a los grupos de menores ingresos; (2) el déficit fiscal generado, el cual en muchos casos ha implicado no sólo el aumento en la inflación, sino también la necesidad de aumentar los impuestos indirectos que se caracterizan por los efectos regresivos que producen y, (3) la elevada dependencia de la ayuda externa que el gobierno ha desarrollado para su funcionamiento y que ha vuelto al país extremadamente vulnerable con respecto a las condiciones y modificaciones que pudiesen operar en dicha variable.

En segundo lugar, la guerra ha demostrado tener una alta incidencia en el comportamiento del nivel de precios internos, especialmente en el rubro de alimentos. Esto ha operado, por una parte,

debido al estancamiento y, o reducción de la producción de granos básicos en las zonas conflictivas, específicamente a raíz de las tácticas de desdoblamiento de dichas zonas llevadas a cabo por la Fuerza Armada a fin de quitar base de apoyo a la guerrilla y que llevan al desplazamiento de la población hacia las áreas urbanas, y, por otra parte, debido a las cadenas especulativas y al desabastecimiento que se han desatado a partir de los paros al transporte decretados por el FMLN y de las operaciones militares que ambos ejércitos desarrollan regularmente. Al respecto, el Ministerio de Agricultura informa que, en el período 1980-1986, el área sembrada y la producción de maíz a nivel nacional disminuyeron. El área cultivada de maíz disminuyó al pasar de 417.8 manzanas en la cosecha de 1980-1981 a 362.1 en la cosecha de 1985-1986 y de 11,447.7 quintales producidos en la cosecha de 1980-1981 se pasó a 10,769.2 en la cosecha de 1985-1986. Mientras tanto, la producción de frijol y arroz se mantuvo estancada a lo largo del período; lo cual contrastó con el aumento observado en la demanda ante el

Gráfico 1
Variación mensual del índice de precios al consumidor: alimentos



Fuente: CIDAL, DIGESTYC.

Esta visión sobre la relación guerra-crisis es la responsable del fracaso de las medidas económicas encaminadas a lograr que la economía crezca a pesar de la guerra.

incremento poblacional de las áreas urbanas.

Los datos disponibles sobre la influencia de los paros al transporte decretados por el FMLN sobre el Índice de Precios al Consumidor de los Alimentos evidencian que existe una fuerte correlación entre ambas variables. Obsérvese la Gráfica 1 que muestra cómo, en 1989, las variaciones más fuertes hacia arriba del Índice de Precios al Consumidor de los Alimentos se dieron en aquellos meses en los cuales el FMLN decretó paros del transporte y en los cuales desarrolló fuertes campañas militares: febrero (primer paro del transporte de 1989 y campaña militar "La lucha armada y la organización combativa es la alternativa ante la farsa electoral"); marzo (segundo paro del transporte); mayo (tercer paro del transporte y campaña militar "Con la unidad y heroísmo el pueblo salvadoreño marcha incontenible a derrotar la dictadura"); julio (cuarto paro del transporte) y septiembre (quinto paro del transporte y campaña militar "Juicio y castigo a los asesinos de San Francisco, San Sebastián").

A los ejemplos anteriores podríamos añadir muchos otros que también mostrarían la íntima relación que guardan entre sí la guerra y la crisis socioeconómica después de nueve años. Basten, sin embargo, para darnos una idea del impacto que una ofensiva militar de la envergadura de la de noviembre pasado puede ocasionar a la economía.

2.2. Los efectos de la ofensiva de noviembre

Los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Planificación (ver Cuadro 2) estiman que los daños directos e indirectos a la economía, causados entre el 11 y 22 de noviembre, ascienden a un total de 597 millones de colones, equivalentes en términos reales a unos 101.72 millones de colones constantes de 1978. Esta última cifra comparada con el total de daños acumulados en el período 1979-1987 (véase nuevamente el Cuadro 1) representa una proporción del 8.25 por ciento. Es decir, los costos económicos oca-

sionados durante sólo 12 días de ofensiva equivalen, en términos reales, al 8.25 por ciento del total de los costos obtenidos durante los nueve años de conflicto.

Cuadro 2
Costos directos e indirectos ocasionados durante la ofensiva de noviembre de 1989.
(En millones de colones)

Sector	Costos directos	Costos indirectos	Total
I. Energía	50	10	60
II. Telecomunicac.	15	5	20
III. Transporte	10	20	30
IV. Construcción	40	11	51
V. Acueductos y Alcantarillados	15	10	25
VI. Producción agrícola	0	50	50
VII. Industria	50	150	200
VIII. Comercio financiero	0	10	10
X. Administración Pública	50	12	62
XI. Servicios varios	1	20	21
Total	239	358	597

Fuente: Ministerio de planificación.

La destrucción en términos humanos también ha sido enorme. El Ministerio de Planificación estima un total de 4,389 víctimas de guerra, de las cuales 176 serían heridos civiles; 64, muertos civiles; 4,131, bajas combatientes y 18 desaparecidos. Por su parte, el FMLN afirma haber causado al ejército 465 muertos y 1,395 heridos, de los cuales el COPREFA acepta 457 y 1,341 respectivamente. El ejército, a su vez, sostiene haber dado muerte a 1,853 militantes del FMLN y haber herido a 1,183; mientras que el FMLN acepta únicamente 401 muertos en sus filas.

No obstante que estas cifras son bastante reveladoras en cuanto al impacto global de la ofensiva sobre los recursos materiales y humanos de la sociedad, a nivel económico es preciso

estudiar más desagregadamente los efectos de la ofensiva sobre algunas variables seleccionadas que en un análisis global podrían pasar desapercibidas.

Los efectos sobre la inflación. Según los datos del Cuadro 3, durante los meses de noviembre y diciembre tuvieron lugar los incrementos más fuertes del Índice de Precios al Consumidor desde los ocurridos entre julio y agosto, a raíz del primer "paquetazo" económico de ARENA.

Cuadro 3
Variación anual del Índice de Precios al Consumidor en 1989
(Base: diciembre de 1978)

Mes	Índice general	Alimentos	Vestuario	Vivienda	Misceláneos
Enero	17.0	29.7	5.4	0.2	5.7
Febrero	17.7	29.3	4.2	0.3	11.0
Marzo	16.3	25.8	4.5	0.4	13.7
Abril	13.7	21.6	4.0	0.4	8.6
Mayo	13.2	20.0	5.9	1.1	7.9
Junio	15.4	23.6	5.6	1.1	9.4
Julio	13.7	20.3	7.1	1.6	7.9
Agosto	19.6	29.9	8.0	2.5	10.7
Septiembre	19.6	30.3	8.7	3.1	9.5
Octubre	20.0	28.8	10.0	5.1	11.3
Noviembre	21.0	30.8	8.1	5.6	10.6
Diciembre	23.5	32.6	9.9	6.6	17.1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Los incrementos en el Índice de Precios al Consumidor en noviembre y diciembre estuvieron condicionados en gran medida por el aumento en el precio de alimentos y de los productos misceláneos ante el claro desabastecimiento sufrido en los centros urbanos afectados directamente por la ofensiva y ante las alzas especulativas experimentadas en las zonas no afectadas directamente.

Los efectos sobre el empleo. Una encuesta realizada por el Ministerio de Planificación entre 387 empresas comprendidas en los municipios de San Salvador, Ciudad Delgado, Mejicanos, Soyapango, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Antiguo Cuscatlán,³ indica que en esas empresas habrían quedado cesantes 1,542 trabajadores a consecuencia directa de la ofensiva, de los cuales 227 lo estarían indefinidamente, mientras que 1,460 por más de seis meses y sólo 8 lo estarían entre 1 y 6

meses. Los trabajadores más afectados por esta situación dentro de la muestra son los que laboraban en la gran empresa de la industria manufacturera.

Pese a que esta información se refiere únicamente a una muestra y a que no abarca todas las zonas del país en las que se desarrolló la ofensiva, da, sin embargo, una idea bastante aproximada de las pérdidas en empleo y en ingresos familiares sufridas a raíz de los acontecimientos de noviembre.

Los efectos sobre la producción. La ofensiva de noviembre tuvo efectos adversos sobre el nivel de producción de la economía, los cuales tardarán varios meses en superarse. El Ministerio de Planificación estima que las empresas industriales de la capital y de los municipios adyacentes funcionaron durante los días de mayor violencia a tan sólo un 10 por ciento de su capacidad total con los consiguientes efectos sobre la producción. Esta disminución en el ritmo de la actividad industrial estuvo condicionada por muchos factores derivados de la situación militar, entre



los cuales cabe mencionar los cortes del fluido eléctrico en las zonas industriales a consecuencia del sabotaje de la guerrilla, el ausentismo de los trabajadores, ⁴ el desabastecimiento de materias primas ante la significativa reducción del transporte de carga y, en muchos casos, los daños ocasionados a la infraestructura física de las empresas debido a los combates y bombardeos de la Fuerza Aérea.

La semiparalización de las actividades también se hizo sentir en el sector de la construcción a través de la disminución del consumo de cemento durante el último trimestre del año (ver Cuadro 4).

Cuadro 4
Producción y consumo de cemento en 1989.
(Miles de bolsas de 42.5 Kg.)

	Trimestres de 1989				Total
	I	II	III	IV	
Producción	3,816	4,430	3,985	2,722	14,952
Consumo	3,878	4,322	3,758	2,999	14,958
Privado	3,734	4,227	3,671	2,918	14,551
Público	144	95	87	81	407

Fuente: FUSADES, "Informe Económico Semanal," 31 de enero de 1990.

En la producción agrícola, los rubros más afectados han sido los productos tradicionales de exportación, porque, en sus últimas etapas, la ofensiva se desarrolló en las zonas cafetaleras y algodonerías, las cuales, en ese momento se encontraban en la etapa más crítica de recolección de las cosechas. Los daños más severos a la producción agrícola de exportación fueron resultado del sabotaje al producto ya beneficiado, del boicot a la recolección decretado por el FMLN en algunas zonas y de la imposibilidad material para recolectar las cosechas en aquellos lugares donde hubo combates. Al respecto, la Cooperativa Algodonera (COPAL) ha estimado que las pérdidas de la cosecha algodонера a raíz de la ofensiva alcanzan el 33 por ciento,⁵ lo cual tendrá consecuencias negativas para la industria textilera y de aceite comestible ya que tendrán que recurrir al exterior para abastecerse de materia prima con los consiguientes efectos negativos sobre la estructura de costos y del sector externo.

Los efectos sobre el tipo de cambio. Durante los meses de noviembre y diciembre se amplió significativamente la brecha existente entre el tipo de cambio en el mercado negro y en el sistema bancario. La diferencia de un décimo se incrementó a casi cinco décimos en los últimos dos meses de 1989. Este incremento se originó principalmente en la gran demanda de dólares desatada a raíz de la ofensiva por aquellos sectores interesados en especular con el tipo de cambio o bien para "poner a salvo" sus capitales fuera del país.

A nivel interno, esta situación repercutió en una menor disponibilidad de divisas para la importación. En diciembre, esa menor disponibilidad hizo aumentar el tipo de cambio extrabancario. Sin embargo, sus repercusiones se hicieron sentir también a nivel centroamericano, especialmente en aquellos países con los que El Salvador tiene una relación comercial más estrecha. Lizardo Sosa, presidente del Banco Central de Guatemala, declaró a *ACAN-EFE*, el 16 de noviembre, que desde el inicio de la ofensiva guerrillera, el 11 de noviembre, la cotización del dólar en su país aumentó sensiblemente tanto a nivel bancario como en el mercado negro, provocando un deterioro en la moneda guatemalteca que se mantendrá por lo menos durante tres años.

Los efectos sobre la inversión. La situación militar de noviembre influyó negativamente sobre las expectativas de inversión privada tanto nacional como extranjera. Esto es obvio porque la inversión no depende sólo del tipo de interés real del mercado (tal como parecen suponerlo los análisis económicos de ARENA), sino que, además, depende de otra serie de factores, entre los cuales las expectativas juegan el papel determinante.

La influencia que la guerra ejerce sobre las expectativas de inversión explica, en gran parte, la drástica reducción de la inversión privada desde 1980 y por qué su nivel no ha podido recuperarse al existente en la década de 1970, pese al cúmulo de incentivos, líneas de crédito y tasas preferenciales de interés que han sido establecidas para atraer inversionistas.

En este sentido, la profundización de la guerra

en noviembre ha inhibido aún más la inversión privada, que por naturaleza teme al riesgo y a la incertidumbre y prefiere los sitios más seguros. Posiblemente, en este hecho se encuentre una explicación de la enorme cantidad de dólares demandada en el mercado negro en noviembre y diciembre y que, posteriormente, fue enviada al extranjero como "medida de seguridad."

Los efectos sobre el déficit fiscal. Aun cuando no se dispone todavía de los datos oficiales sobre el total de gastos no programados que el Ministerio de Defensa tuvo que hacer para enfrentar la ofensiva del FMLN, según un informe del Banco Central de Reserva, dichos gastos adicionales fueron responsables, en buena parte, de que el déficit del sector público no financiero (incluyendo las donaciones) haya alcanzado, en 1989, la cifra record de 968 millones de colones.

Los únicos datos disponibles hacen referencia a los pagos de salarios extraordinarios que han debido hacerse a raíz de la incorporación de 5,000 reservistas a las filas del ejército en el mes de noviembre, lo cual ha obligado, recientemente, a la asamblea legislativa a aprobar un refuerzo para el presupuesto de defensa y seguridad pública de 19,018,982 colones para el ejercicio fiscal de 1990, pese a que el gobierno repetidamente ha insistido en la necesidad de reducir el gasto público ya que ha ordenado un congelamiento del 5 por ciento en todos los presupuestos de los ministerios en 1990.

Asimismo, el sabotaje a los servicios públicos ha creado una mayor presión sobre la situación financiera de las empresas estatales que a su vez ha conllevado, en algunos casos, a la necesidad de aumentar las tarifas para los usuarios. El presidente de la CEL, al justificar el aumento de tarifas del consumo de energía eléctrica decretado en el mes de febrero, argumentó que los sabotajes de la guerrilla al sistema de transmisión eléctrica a nivel nacional durante la ofensiva ascendieron a más de 21 millones de colones que al sumarse a los 328 millones de colones que han costado los sabotajes a la CEL desde 1980, hacen impostergable el incremento de tarifas para los consumidores.

Los efectos sobre las necesidades básicas. De todos los efectos adversos que la guerra tiene sobre la economía salvadoreña, posiblemente los que mayor deterioro han producido a nivel agregado han sido los efectos sobre las necesidades básicas de la mayoría de la población, sobre todo porque se han combinado con los efectos producidos por las políticas de ajuste y estabilización económica y con las características estructurales de la economía salvadoreña.

La guerra opera negativamente sobre las necesidades básicas cuando la inflación que produce deteriora los salarios reales y vuelve más concentrada la distribución del ingreso; cuando deteriora prestación de servicios básicos como electricidad, agua, transporte, salud y educación; cuando genera desempleo y sub-empleo; cuando hace disminuir la disponibilidad interna de alimento y cuando obliga a amplios contingentes de la población a desplazarse de sus lugares de origen a refugios dentro o fuera del país ante la destrucción de sus hogares o modo de vivir.

Durante la ofensiva del mes de noviembre, todos los elementos mencionados antes, directa o indirectamente, se combinaron de manera tal que el efecto final fue un mayor deterioro de la situación de las necesidades básicas de la población.

Como ejemplo de este deterioro citemos el caso del sector vivienda. El Ministerio de Obras Públicas calcula en siete millones y medio de colones los daños ocasionados en noviembre a las viviendas de la capital, de los municipios aledaños, de Zacatecluca y de San Miguel (ver Cuadro 5). Estos daños habrían sido causados por los combates directos entre el ejército y el FMLN y por los bombardeos y "roqueteos" efectuados por la Fuerza Aérea en dichas zonas. Los mayores daños se concentran en los populosos sectores obreros de Soyapango, Mejicanos y Ciudad Delgado y en la ciudad de San Miguel. En todos estos lugares, la población, además de soportar la destrucción física de sus hogares, perdió sus enseres y aparatos domésticos en los saqueos disfrazados de "registros preventivos" llevados a cabo por supuestos miembros del ejército y cuerpos de seguridad en las viviendas que habían sido evacuadas temporalmente por sus habitantes.

Cuadro 5
Viviendas dañadas durante la ofensiva
de noviembre de 1989
y monto de daños por municipio.
 (En millones de colones)

Municipio	Unidades dañadas	Costo de los daños
San Salvador	173	1,279,485
Mejicanos	815	4,045,265
Soyapango	1,637	13,231,978
Ciudad Delgado	304	5,299,118
Cuscatancingo	106	905,510
Apopa	13	93,128
Zacatecoluca	71	251,858
San Miguel	684	7,048,495

Fuente: Ministerio de planificación, "Encuesta de viviendas dañadas por ofensiva del FMLN," noviembre de 1989.

3. Consideraciones finales

Nos parece que es evidente el impacto de la guerra en la economía. Cualquier variable macroeconómica que consideremos en profundidad nos muestra la acción negativa de la guerra, ya sea que se trate del déficit fiscal, como de la inflación, de la producción o del empleo, etc. La guerra siempre está presente. Todas las fuerzas sociales y políticas aceptan esto, aunque no todas lo hacen con la misma convicción, razón por la cual se presenta a menudo la tentación de proyectar metas y objetivos económico-sociales, olvidándose de la incidencia de la guerra y que ésta en su dinámica puede echar al traste los mejores propósitos.

Lo peor sería no hacer nada para tratar de reactivar la economía, pero de ello no se sigue que se logrará dicha reactivación o que podamos darnos al mortal lujo de seguir dando largas a la solución del conflicto.

Ciertamente, la guerra afecta de distinta manera y en distinto grado a los diferentes sectores sociales —algunos de ellos, incluso, se benefician de ella. Por eso, para algunos sectores el poner punto final al conflicto se presenta como algo postergable, mientras que para otros es una tarea

urgente e impostergable. Tal es nuestra perspectiva que busca situarse en el punto de mira de las mayorías populares, quienes padecen con más intensidad las consecuencias de la guerra en lo económico, en lo político y en lo social. En cierta forma, este ha sido el factor que más ha incidido para que no se encuentre un punto final al conflicto, por una parte, y, por otra, porque esas mismas consecuencias de la guerra hacen posible que ésta continúe al mismo tiempo que la retroalimentan.

Debería de comprenderse en toda su complejidad el fenómeno de la guerra y, en ese sentido, no buscar salidas falsas. En consecuencia, el gobierno debería hacer una propuesta de paz que al menos contenga los puntos siguientes: un reconocimiento de los orígenes reales del conflicto, y de los factores sociales, económicos y políticos que lo retro-alimentan; una serie de medidas encaminadas a resolver en el mediano plazo las fallas estructurales y, finalmente, ofrecer garantías suficientes como para que toda la izquierda del país se incorpore a la actividad política. Este sería un auténtico proceso democratizador que ameritaría el abandono de las armas, y que daría paso, por fin, a un proceso real de estabilización y reactivación económica.

Notas

1. Ver Banco Central de Reserva, "conferencias conmemorativas quincuagésimo aniversario," junio de 1984.
2. Ver Alexander Segovia, "Límites y dilemas de la política económica en un país en guerra; el caso de el Salvador," *Revista Realidad Económica-social*, noviembre-diciembre de 1988.
3. Ver Ministerio de Planificación, "Encuesta de daños a la economía," diciembre de 1989.
4. Datos oficiales estiman que en los municipios de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Zacatecoluca, Usulután y San Miguel, donde ocurrieron los combates principales habita la mayor parte de la PEA ocupada (413,130) tanto del sector formal como del informal.
5. Ver *El Salvador de Hoy*, 26 de febrero de 1990, pp. 13-19.
6. Banco Central de Reserva, "Evolución Económica en 1989," enero de 1990.